

**DE LA CONVIVENCIA SUCESIVA ENTRE CÓNYUGE O COMPAÑERO
PERMANENTE CON DERECHO A ALIMENTOS SANCIÓN Y EL CÓNYUGE
SUPÉRSTITE CON DERECHO A PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES.**

María Paulina Calle Correa

Laura Cristina Maya Gutiérrez.

Abril de 2019.

Universidad EAFIT.

Asesor: Armando Munera Posada.

Escuela de Derecho.

Trabajo de grado para optar al título de abogadas.

Abstract

Aunque los alimentos sanción y la pensión de sobrevivientes son dos instituciones jurídicas sumamente diferentes, ambas buscan ofrecer una protección de los derechos fundamentales de las personas, como el derecho al mínimo vital y a la vida digna, y así mismo asegurar su supervivencia en condiciones dignas garantizándole así ciertos derechos y principios constitucionales que además son fundamentales,

Cuando existe una persona titular del derecho a pensión alimentaria y su alimentario, el cual, estando pensionado, muere; pero antes de su muerte y luego de haber terminado relación con la misma y habiendo ya liquidado la sociedad conyugal o patrimonial, había convivido por más de 5 años con una nueva pareja, dejando entonces a un cónyuge supérstite que en teoría sería la titular de la pensión de sobrevivientes, se da un evidente caso de vacío normativo ya que no se han realizado pronunciamientos acerca del tema y no hay norma que regule como se debe proceder y continuar el pago de esta prestación. Por lo que regular los aspectos alrededor de dicha situación resulta de suprema importancia para así evitar vacíos normativos que resulten en la violación y/o desconocimiento de los derechos de las personas.

Lo anterior supone dejar en situación de completo desamparo y desprotección a los cónyuges o compañeros permanentes con derecho a una pensión de alimentos sanción con sociedad liquidada. Además, la falta de una regulación le permite a los Regímenes Administradores de Pensiones cesar el pago de esta prestación al momento en que es otorgada la Pensión de Sobrevivientes al cónyuge o compañero o compañera permanente que le corresponda.

Tabla de contenido

1. Introducción	4
2. Marco normativo	8
2.1. Pensión de sobreviviente.....	10
2.2. Alimentos sanción	13
3. Contexto histórico: ¿qué hacen los Regímenes Administradores de Pensiones frente al vacío normativo existente?	19
4. Vulnerabilidad del excónyuge o excompañero permanente con pensión alimenticia. .	22
5. Dos instituciones jurídicas diferentes pero con vocación similar.	23
6. Amparo de derechos y principios constitucionales	26
6.1. Cumplimiento de los principios constitucionales	27
6.2. Derecho a la familia como núcleo de la sociedad y del Estado	31
6.3. Derecho al mínimo vital y a la vida digna.....	33
7. Aspectos relevantes a tener en cuenta de los alimentos sanción	38
7.1. Se deben durante toda la vida del beneficiario del derecho de alimentos	38
7.2. Gravan la masa hereditaria del causante	42
7.3. Constituyen una decisión judicial.....	43
8. Una breve respuesta a las justificaciones usadas por los Regímenes Administradores de Pensiones para negar el derecho de la pensión alimenticia.....	46
9. Jurisprudencia relevante.....	49
10. Conclusiones	68
11. Bibliografía	74

1. Introducción

Los alimentos sanción y la pensión de sobrevivientes son dos instituciones jurídicas, consagradas dentro de nuestro Ordenamiento Jurídico, las cuales gozan de protección Constitucional, regulación específica con normas que van en concordancia a los fines y principios constitucionales y en aras de velar por la garantía de los derechos fundamentales de las personas.

Sin embargo, cuando se dan ciertas situaciones específicas en las cuales ambas figuras se ven involucradas dentro de un mismo contexto jurídico, es notoria la existencia de un vacío normativo, pues es allí donde lo planteado por una y otra disposición genera problemáticas y escenarios de injusticia y desconocimiento de los derechos de las personas. Esto es debido a que no hay una norma especial y concreta que regule dichas situaciones y establezca con claridad y certeza cómo se debe dar aplicación correcta a estas figuras y su regulación y en consonancia con los fines últimos de las normas.

Cuando existe una persona titular del derecho a pensión alimentaria entonces y su alimentario, el cual, estando pensionado, muere; pero antes de su muerte y luego de haber terminado relación con la misma y habiendo ya liquidado la sociedad conyugal o patrimonial correspondiente, había convivido por más de 5 años con una nueva pareja, dejando entonces a un cónyuge supérstite que en teoría sería la titular de la pensión de sobrevivientes, se da un evidente caso de vacío normativo. Esto debido a que no se han realizado pronunciamientos acerca del tema y no hay norma que regule como se debe proceder y como debe continuar el pago de esta prestación.

Así pues, la convivencia sucesiva y no simultánea con personas diferentes, ya no es un hecho excepcional, sino que, por el contrario, aunque es especial, ya se está presentando cada vez con mayor frecuencia en las parejas de la sociedad colombiana. Por lo que resulta de suprema importancia regular esta situación de convergencia entre los alimentos sanción y la pensión de sobrevivientes; para que en ningún caso resulte en la violación y/o desconocimiento de los derechos de ninguna de las partes como ha estado sucediendo; ya que de dicho reconocimiento depende la materialización de una vida en condiciones dignas para la persona titular de la pensión alimenticia.

Lo anterior supone, claramente, no solo una violación a los derechos fundamentales y al mínimo vital de las personas titulares de las pensiones alimenticias, sino también una desprotección grave de la familia como núcleo base y fundamental de la sociedad; debido a que como bien lo regula la ley y lo confirman los pronunciamientos de las Altas Cortes, mientras subsistan las razones que dieron lugar a dicha sanción los alimentos, se deben por toda la vida del alimentario, ya que de la misma depende la supervivencia de una persona.

Sin embargo, la falta de una regulación clara y concreta frente a este tema le permite a los Regímenes Administradores de Pensiones el pago de esta prestación al momento en que es otorgada la Pensión de Sobrevivientes al cónyuge o compañero o compañera permanente que le corresponde.

Lo anterior, deja en situación de completo desamparo y desprotección a los cónyuges o compañeros permanentes con derecho a una pensión de alimentos sanción con sociedad

liquidada, ya que esta sanción se establece a favor de personas que por sus condiciones no pueden suplir por si mismos sus necesidades básicas de supervivencia.

Entonces, aunque los alimentos sanción y la pensión de sobrevivientes, una desde la línea de derecho de familia y otra desde la línea del Sistema de Seguridad Social Integral, son dos instituciones jurídicas sumamente diferentes, ambas buscan ofrecer una protección de los derechos fundamentales de las personas, como el derecho al mínimo vital y a la vida digna, y así mismo asegurar su supervivencia en condiciones dignas garantizándoles así el reconocimiento de derechos que son fundamentales y el respeto de en principios constitucionales en los que están fundamentadas estas instituciones jurídicas.

Por lo tanto, se analizarán los principios y normas en materia pensional, específicamente en lo relacionado con la pensión de sobrevivientes y la seguridad social, la vocación y justificación del legislador al consagrar dichas normas y también con respecto de los alimentos sanción, profundizando en la jurisprudencia generada cuando se dan casos donde hay conflicto entre ambas; para determinar que si es posible que se le reconozca la pensión de sobrevivientes al cónyuge supérstite o compañero permanente del fallecido, pero a la vez que se siga cumpliendo con la obligación de alimentos sanción que estaba a cargo del mismo.

Luego de analizar los principios y normas en materia pensional, específicamente en lo relacionado con la pensión de sobrevivientes y la seguridad social; y según la vocación y justificación del legislador al consagrar dichas normas y con respecto de los alimentos sanción, será posible determinar que si es posible que se le reconozca la pensión de sobrevivientes al

cónyuge supérstite o compañero permanente del fallecido, pero a la vez que se siga cumpliendo con la obligación de alimentos sanción que estaba a cargo del mismo.

Así pues, ¿no debería entonces ser la interpretación realizada por la jurisprudencia y el legislador, dada la motivación de las disposiciones jurídicas en cuestión, incluyente?

Lo anterior debido a que el reconocimiento de una no debería suponer el desconocimiento de la otra, pues las mismas no son excluyentes y tienen la igual vocación, la cual es la protección de la familia, la supervivencia, la vida digna y los derechos de las personas.

En resumen, esta monografía busca elaborar un análisis sobre la divergencia entre la pensión de sobrevivientes y los alimentos sanción, cuando el causante de estas fallece, e indagar sobre la posibilidad de que continúe con el reconocimiento de la pensión alimenticia al titular de esta, aun después de la muerte de su ex cónyuge o compañero permanente, ya que de lo contrario quedaría en una situación de completa desprotección y desamparo, ya que de ella depende para cubrir las necesidades básicas de su diario vivir.

2. Marco normativo

La norma es clara en establecer, la pensión de sobrevivientes como un derecho en nuestro ordenamiento y también al regular lo concerniente a los alimentos sanción; es evidente que ambos son derechos que tienen fundamento en el principio constitucional de protección a la familia, solidaridad y equidad, los cuales buscan proteger los individuos, su supervivencia y garantizarles unas condiciones de vida digna.

Sin embargo, no hay una disposición normativa expresa que determine con claridad que sucede cuando ambas convergen y coinciden en una misma situación, es decir, cuando existe una persona titular de un derecho de alimentos y su alimentario, el cual, estando pensionado o siendo cotizante, muere, pero antes de su muerte y luego de haber terminado relación con la misma y habiendo ya liquidado la sociedad conyugal o patrimonial (según sea el caso) había convivido por más de 5 años con una nueva pareja, dejando entonces a un cónyuge o compañero supérstite, que en teoría sería quien se le otorga la pensión de sobreviviente.

Es importante aclarar que la norma, específicamente el artículo 47 de la ley 100 de 1993¹, es clara en afirmar que sucede cuando se da el caso de que existe un excompañero/compañera permanente o cónyuge y que su sociedad conyugal o patrimonial no haya sido disuelta. De igual forma, también indica cómo se debe proceder cuando hay una convivencia simultánea; y

¹ COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 100 (23, diciembre 1993). Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial No. 41.148 del 23 de diciembre de 1993. Artículo 47

establece también si no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal, pero hay una separación de hecho entre ellos.

En el primer caso, según la norma, la pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido. En el segundo caso, “la beneficiaria o el beneficiario de la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo”² y en el tercer caso, “la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente”³.

Pero ¿qué sucede cuando hay cónyuge supérstite y ex cónyuge o ex compañero/compañera permanente con derecho a alimentos sanción y sociedad conyugal/patrimonial ya liquidada? ¿aplica alguna de las normas anteriores?

Como ya se indicó, no se indica cómo se debe proceder o que norma aplica, cuando existe una persona titular del derecho a pensión alimentaria y su alimentario, el cual, estando pensionado, muere; pero antes de su muerte y luego de haber terminado relación con la misma y habiendo ya liquidado la sociedad conyugal o patrimonial, había convivido por más de 5 años con una nueva pareja, dejando entonces a un cónyuge o compañero/compañera supérstite que en teoría sería la titular de la pensión de sobrevivientes y un ex cónyuge o ex compañero/compañera permanente con unos alimentos sanción ya decretados y de los cuales depende su supervivencia.

² Ibidem

³ Ibidem

¿qué sucede entonces? ¿cómo se debería solucionar dicha problemática que se genera con el vacío normativo?

Es por lo anterior, que los pronunciamientos de las Altas Cortes referentes al tema en cuestión y la hermenéutica jurídica son claves para el análisis de la problemática en cuestión.

Será tomada en cuenta la vocación de las disposiciones normativas de una y otra institución jurídica y, por ende, que buscaba el legislador al regularlas; ya que la jurisprudencia debe interpretar las problemáticas y las normas que se ven involucradas en las mismas, para pronunciarse al respecto y solucionar los conflictos que se generan en el día a día. Más aún, cuando existe poca normativa al respecto o cuando las disposiciones normativas son reducidas y poco claras.

2.1. Pensión de sobreviviente

La pensión de sobrevivientes es una prestación económica que busca garantizar “una renta periódica a los miembros del grupo familiar de quien dependían económicamente, como consecuencia de su muerte y de haber realizado en vida, cotizaciones al sistema de Seguridad Social. Su finalidad es no dejar en una situación de desprotección o de abandono a los beneficiarios del afiliado o pensionado que fallece”⁴, en este caso en concreto el cónyuge o compañero o compañera permanente del causante.

⁴ Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-005 de 2018. SU005/18. (M.P Carlos Bernal Pulido; 13 de febrero de 2018)

Así pues, la pensión de sobrevivientes y por extensión la sustitución pensional, están reguladas en la ley 100 de 1993 modificada por la ley 797 del 2003; y corresponde a la pensión a la que tienen derecho los familiares del cotizante o pensionado, cuando el mismo muere.

La misma, según la Corte Constitucional busca garantizar “una renta periódica a los miembros del grupo familiar de quien dependían económicamente, como consecuencia de su muerte y de haber realizado en vida, cotizaciones al sistema de Seguridad Social. Su finalidad es no dejar en una situación de desprotección o de abandono a los beneficiarios del afiliado o pensionado que fallece”⁵

Los artículos 47 y 74 de la ley 100⁶, modificados por el artículo 13 de la ley 797 de 2003⁷, indican que los beneficiarios entonces de dicha prestación serán única y exclusivamente los familiares del pensionado o cotizante, y además indica que existe una Prelación entre los mismos ya establecida que debe respetarse. Tanto en el Régimen Prima Media (como artículos 46, 47 y 48 de la ley 100 de 1993⁸), como en el Régimen de Ahorro Individual (artículos 74, 46 y 48 de la ley 100 de 1993⁹) aplican los mismos requisitos.

⁵ Ibidem.

⁶ COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 100 (23, diciembre 1993). Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial No. 41.148 del 23 de diciembre de 1993. Artículo 47

⁷ COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 797 (29, enero 2003). Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales. Diario Oficial No. 45.079 de 29 de enero de 2003. Artículo 13.

⁸ COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 100 (23, diciembre 1993). Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial No. 41.148 del 23 de diciembre de 1993.

⁹ Ibidem

La Corte Constitucional adicionalmente, en la Sentencia C-1035 del 22 de octubre de 2008 indica que “la pensión de sobrevivientes es un derecho revestido por el carácter de cierto, indiscutible e irrenunciable, y constituye para sus beneficiarios un derecho fundamental”¹⁰, por lo que es sumamente claro el carácter fundamental y constitucional de esta prestación.

Asimismo, en el asunto que nos concierne, que es el del cónyuge o compañero o compañera permanente del causante, el mismo artículo 47 de la Ley 100 de 1993¹¹, señala que para esta prestación económica existen tres tipos de pensiones de sobrevivientes para los cónyuges; que se diferencian entre sí por el tiempo de convivencia y la edad del cónyuge, los cuales son pensión de sobrevivientes vitalicia, temporal y compartida.

Al regular esta pensión entonces, el legislador busca, la protección de la familia y por ende, de las personas cercanas al causante, que dependían de él para su supervivencia; para de alguna forma, evitar que queden en desprotección y situaciones difíciles luego de la muerte del mismo; dejándoles así con dicha pensión un sustento económico para su supervivencia básica.

Y, ¿qué requisitos existen para acceder a ella?

La norma, diferencia entre la pensión de sobrevivientes de forma vitalicia y pensión de sobrevivientes de forma temporal para establecer los requisitos para ser beneficiario de la misma.

¹⁰ Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-1035 de 2008. (M.P Jaime Córdoba Triviño; 22 octubre 2008)

¹¹ COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 100 (23, diciembre 1993). Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial No. 41.148 del 23 de diciembre de 1993. Artículo 47.

De forma vitalicia, el cónyuge o compañero/compañera permanente deberá tener 30 años o más, acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y que convivió con el no menos de 5 años continuos anteriores a la muerte del pensionado. Por otro lado, de forma temporal el supérstite deberá tener menos de 30 años, no tener hijos con el causante. Además, deberá cotizar para obtener su propia pensión.

Con los anteriores requisitos, podrá entonces solicitar, luego del fallecimiento del causante, que se le reconozca la pensión de sobrevivientes a su favor para así buscar asegurar la supervivencia y vida dignas de la misma.

2.2. Alimentos sanción

Los alimentos sanción que se deben entre cónyuges divorciados, son una obligación alimentaria que se materializan por los principios de solidaridad y reciprocidad que tienen las parejas; y consiste en suministrar lo necesario para garantizar la existencia cuando uno de los cónyuges no tenga los medios suficientes para subsistir en condiciones dignas y están a cargo de la persona que fue culpable del fin de la relación sentimental.

Teniendo en cuenta el planteamiento que hace la Corte Constitucional en la sentencia C-727 del 25 de noviembre de 2015¹², se entiende la obligación alimentaria como aquella que presupone la existencia de una situación de hecho en particular y una norma jurídica que generan

¹² Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-506 de 2011. (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; 30 de junio 2011)

consecuencias en derecho. Su finalidad radica en el deber de solidaridad que tienen los miembros de una familia y en la subsistencia de estos.

Los alimentos se deben durante toda la vida del alimentario, según lo consagrado en el artículo 422 del Código Civil¹³ y la Corte Constitucional en Sentencia T-506 del 30 de junio de 2011¹⁴, esto siempre y cuando subsistan las razones que dieron origen al surgimiento de esta obligación, y que la persona alimentada dependa de ese sustento para sobrevivir en condiciones dignas.

Para que proceda, es necesario que exista y se demuestre, tanto la necesidad del beneficiario y la capacidad económica del obligado, sin que ello implique un sacrificio para el mismo. Esta figura se encuentra consagrada en los artículos 411 a 427 del Código Civil¹⁵ en los cuales se regulan cuáles son los medios de protección, las clases de alimentos, reglas, duración, entre otros.

Según lo anterior, en la sentencia T-266 del 28 de abril de 2017, la Corte Constitucional establece que la obligación alimentaria es:

una prestación económica de carácter civil que, en virtud del principio de solidaridad que rige las relaciones entre los particulares, se debe entre dos personas naturales. Ello, pues, en virtud del estado de necesidad en que una de

¹³ COLOMBIA. Congreso de la República. “Código Civil”. Editorial Legis. 2013. Artículo 422.

¹⁴ Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-506 de 2011. (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; 30 de junio 2011)

¹⁵ COLOMBIA. Congreso de la República. “Código Civil”. Editorial Legis. 2013. Artículo 411 y 427.

estas se encuentra y por el vínculo jurídico que los une, la parte que se halla en capacidad de velar por el sostenimiento económico de ambos está en la obligación de permitirle a la primera satisfacer sus necesidades básicas de manutención¹⁶.

Y, ¿qué requisitos existen para acceder a ella?

Por otro lado, en la Sentencia C-237 del 20 de mayo de 1997, la Corte establece cuales son los requisitos que deben cumplir los beneficiarios, regulados por el artículo 411 del Código Civil:

(i) que el peticionario requiera los alimentos que demanda; (ii) que la persona a quien se le piden alimentos tenga los recursos económicos para proporcionarlos y (iii) que exista un vínculo de parentesco o un supuesto que origine la obligación entre quien tiene la necesidad y quien tiene los recursos; resaltando que: “El deber de asistencia alimentaria se establece sobre dos requisitos fundamentales: la necesidad del beneficiario y la capacidad del deudor, quien debe ayudar a la subsistencia de sus parientes, sin que ello implique el sacrificio de su propia existencia.”¹⁷

El anterior planteamiento va de la mano con el principio de solidaridad consagrado en la Constitución Política, y específicamente el que se debe tener entre los cónyuges y compañeros permanentes.

¹⁶ Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-266 de 2017. (M.P Alberto Rojas Ríos; 28 abril 2017)

¹⁷ Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-237 de 1997. (M.P Carlos Gaviria Díaz; 20 mayo de 1997)

Los alimentos entre cónyuges se deben en tres situaciones específicas, estas son:

La legislación civil colombiana, en atención del principio de solidaridad que se traduce en el deber de ayuda mutua entre los cónyuges, implica que se deban alimentos en las siguientes situaciones: - Cuando los cónyuges hacen vida en común; - Cuando existe separación de hecho. Los cónyuges separados de hecho o de cuerpos o judicialmente, entre tanto se mantengan sin hacer vida marital con otra persona conservan el derecho a los alimentos. -En caso de divorcio, cuando el cónyuge separado no es culpable. Finalmente, es preciso señalar que las disposiciones en materia de alimentos no se limitan a los cónyuges, sino que se hacen extensivas a los compañeros permanentes, por cuanto el origen de esta obligación se encuentra en el deber de solidaridad, según fuera dispuesto en sentencia T-1033 de 2002¹⁸.

Finalmente, la obligación alimentaria se puede terminar “cuando desaparezcan la necesidad y la falta de recursos económicos del alimentario, o cuando las condiciones económicas del alimentante varíen e impidan continuar suministrando los alimentos”¹⁹.

¹⁸ Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-506 de 2011. (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; 30 de junio 2011)

¹⁹ Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-095 de 2014. M.P: Luis Ernesto Vargas Silva; 20 febrero 2014)

1.1 Vacío normativo

Si bien es cierto que ambas figuras, son disposiciones jurídicas consagradas en el Derecho Laboral y el Código Civil, son protegidas por el Legislador y además diferentes pero de gran relevancia en el ordenamiento jurídico; existen ciertas ocasiones donde las mismas pueden llegar a divergir y crear controversias entre lo planteado por una y otra disposición, ya que existe un vacío normativo; donde no hay una norma que regule dichas situaciones especiales y establezca con claridad cómo se deben aplicar estas disposiciones en el momento de que una situación de esta se produzca; lo que conlleva a escenarios de injusticia, de desconocimiento de derechos y aún más importante, de vulneración de principios y derechos fundamentales, como lo son los derechos de la familia y el mínimo vital.

Por consiguiente, el vacío normativo aparece cuando existe una persona titular de un derecho de alimentos y su alimentario, el cual, estando pensionado, muere; pero antes de su muerte y luego de haber terminado relación con la misma y habiendo ya liquidado la sociedad conyugal o patrimonial anterior (según sea el caso) había convivido por más de 5 años con una nueva pareja, dejando entonces a un cónyuge o compañero supérstite, que en teoría sería quien adquiriría la pensión de sobrevivientes y un ex cónyuge o ex compañero/compañera permanente titular de unos alimentos sanción a cargo del causante.

Así las cosas, hoy en día los Regímenes pensionales Régimen de Prima Media (de ahora en adelante RPM) y el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (de ahora en adelante RAIS), cuando se presenta la situación anteriormente señalada, y gracias al vacío normativo que existe,

no están reconociendo a los titulares de las pensiones alimenticias su derecho una vez el afiliado o pensionado muere, dejándolo así en una clara situación de desprotección y desamparo y sin una normatividad clara y específica que los ampare.

El problema recae entonces en que no existe una disposición normativa, una regulación clara ni se han realizado pronunciamientos determinantes al respecto, que determinen que sucede en esos casos, con la pensión de sobreviviente y con la cuota alimentaria que se debe pagar al ex cónyuge o compañera o compañero permanente, y por ende, dicho vacío normativo faculta a los Regímenes Administradores de Pensiones a negar dicha prestación y por ende a dejar en situación de desamparo a muchas personas.

3. Contexto histórico: ¿qué hacen los Regímenes Administradores de Pensiones frente al vacío normativo existente?

Los Regímenes Administradores de Pensiones, que están directamente relacionadas con la problemática, se ensañan en afirmar que una vez el cotizante o pensionado fallece, la obligación de alimentos sanción termina con la vida del causante, y que, por lo tanto al realizar el reconocimiento de la pensión de sobreviviente al cónyuge o compañero/compañera supérstite, se anula el pago de esta prestación de la anterior cónyuge o compañero/compañera permanente y se desconocen sus derechos, privándole de manera definitiva del dinero que esta persona recibía, fruto de la sanción que había sido impuesta por un juez y que de ella surgía el sustento para su supervivencia mínima y vida digna.

Así como en sentencia T-177 del 2 de abril de 2013²⁰, la Corte Constitucional se pronuncia respecto a un caso en el cual, la entidad encargada de administrar las pensiones, en ese entonces el Instituto de Seguros Sociales (de ahora en adelante ISS) fundamentaba la decisión de negar el descuento para el pago de la cuota alimentaria de la anterior cónyuge o compañero/compañera permanente “en razón a que la cónyuge supérstite del causante no tiene ninguna relación ni ninguna clase de parentesco con la misma (la titular del derecho sanción)”²¹ y que con la muerte del causante se terminaba entonces la obligación alimentaria que había en cabeza de este.

Cuando se presenta la situación anteriormente señalada, y gracias al vacío normativo que existe, los Regímenes Administradores de Pensiones no están reconociendo a los titulares de las

²⁰ Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-177 de 2013. (M.P. María Victoria Calle Correa; 2 de abril 2013).

²¹ Ibidem.

pensiones alimenticias su derecho y cesan el pago de dicha prestación una vez el afiliado o pensionado muere y es otorgada la Pensión de Sobrevivientes al cónyuge o compañero o compañera permanente que le corresponde; dejándolo así en una clara situación de desprotección y desamparo y sin una normatividad clara y específica que los ampare.

La falta de regulación clara y de una manera concreta de cómo se debe proceder al momento del fallecimiento del causante, le permite entonces a las Administradoras de Pensiones desconocer el pago de dicha obligación. Y, por ende, cuando el causante fallece inmediatamente cesan el pago de la cuota alimentaria, como si dicha muerte supusiera que el alimentado no requiere más de los alimentos que le fueron reconocidos.

Y con estos presupuestos el Régimen de Prima media encargado de la administración de las pensiones, se han encargado de a través de sus resoluciones, una vez fallecido el cotizante o pensionado, de censurar el pago de los alimentos sanción; aún en los casos donde durante la vida del causante se hacía por medio de un descuento a la pensión.

¿En que fundamentan la decisión las Administradoras de pensiones para negar el pago de la obligación alimentaria en cabeza del ex cónyuge o ex compañero/compañero permanente?

Las administradoras de pensiones fundamentan siempre la decisión de negar el descuento para el pago de la cuota alimentaria de la accionante en dos razones:

- Que la cónyuge supérstite del causante no tiene ninguna relación, ni ninguna clase de parentesco con la misma, entonces no tiene por qué asumir dicha obligación.

- Que no existe dicho derecho ya que la accionante no comprobó que hubiera tenido una convivencia con el causante en los 5 años anteriores a la muerte del mismo.

Lo anterior, rechazando y de igual manera, desconociendo, una orden judicial que ya se había tomado mediante un fallo, por el órgano competente para decidir sobre dichos conflictos.

Además, cuando se da el agotamiento de la vía gubernativa no solo niegan el pago de la obligación, sino que cesan el pago de una forma intempestiva y repentina; desconociendo de manera clara los derechos de dichas personas que contaban con un derecho fruto de una decisión judicial. Esto se hace, aun cuando el pago de los alimentos sanción se hacía durante la vida del causante mediante descuento de la pensión del mismo.

Igualmente, la problemática frente a las Regímenes Administradores de Pensiones radica en que dichas personas, a las que se les están negando el pago de los alimentos sanción una vez acuden a las administradoras de pensiones, sino que frente a la negativa no agotan la vía judicial para hacer valer sus derechos, sino que por el contrario se quedan simplemente con la decisión de las Administradoras de pensiones, creyendo que evidentemente con la muerte del alimentante se da por terminado su derecho, como se lo indican en la resolución que les niega el pago de los alimentos sanción.

4. Vulnerabilidad del excónyuge o excompañero permanente con pensión alimenticia.

La falta de regulación y la reacción de las Administradoras de pensiones genera entonces una vulneración de derechos fundamentales como lo son el mínimo vital, la vida digna y la integridad de las personas que ya tenían reconocidas el derecho a la pensión alimenticia, dejándolos entonces desamparados, sin un auxilio y sin un sustento para sobrevivir.

Está claro, y no se pondrá en duda en esta monografía, que la persona que convivió con el causante no menos de cinco años con anterioridad a su muerte y que acreditó los requisitos ya enunciados en el Capítulo 2.1 de esta monografía, tiene derecho, como cónyuge o compañera o compañero supérstite, al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, que garantice la protección que produce el descenso de quien proveía lo necesario para su supervivencia.

Sin embargo, el problema radica que, por el reconocimiento de dicha pensión de sobrevivientes se están trasgrediendo los derechos de otro sujeto una vez se produce la muerte del cotizante o pensionado, que es el que tenía derecho de la pensión alimenticia a los que tiene derecho la ex cónyuge o compañero permanente del causante.

5. Dos instituciones jurídicas diferentes pero con vocación similar.

Ya está claro que ambas instituciones jurídicas, alimentos sanción y pensión de sobrevivientes, regulan dos situaciones diferentes; sin embargo, las mismas tienen múltiples puntos de semejanza. Por lo que, en vez de excluirse, deberían por lo contrario complementarse. Así, que el reconocimiento de una no suponga el desconocimiento de la otra.

En principio, ambas tienen los mismos fines. Las dos instituciones persiguen la protección de la familia y de las personas cercanas a la persona que falleció y del cual dependían las personas para cubrir sus necesidades básicas del diario vivir y de garantizar que continúen su vida en condiciones dignas. Buscan que el fallecimiento de esa persona no tenga una tan grave repercusión en sus vidas, por lo menos en el ámbito económico. Es un derecho que busca la subsistencia de la familia.

Ambas claramente, velan por la supervivencia de los miembros de la familia y fueron establecidas y reguladas por el legislador para garantizar condiciones mínimas de vida, para tratar de que los miembros de la familia que dependían de la persona que falleció puedan tratar de continuar su vida con un sustento económico que cubra sus necesidades básicas. Como lo indica la corte “su finalidad es no dejar en una situación de desprotección o de abandono a los beneficiarios del afiliado o pensionado que fallece”²².

²² Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-005 de 2018. (M.P Carlos Bernal Pulido; 13 de febrero de 2018).

Por ello también, los dos tienen un origen en el deber de solidaridad que tienen los miembros de una familia de ayuda mutua, que se fundamenta en que cuando uno de ellos no tiene la posibilidad económica de hacerlo por sus propios medios, quienes tienen la capacidad deben otorgarles lo necesario para su subsistencia. Esto lo reafirma la corte en sentencia T-559 del 31 de agosto 2017²³.

Los principios constitucionales que se ven involucrados en ambas disposiciones normativas también son muy similares. Los principios de proporcionalidad, solidaridad y equidad son los principales que regulan ambas figuras; por lo que el principio de la equidad y la igualdad deberían entonces tomar partida también para mediar cuando existen conflictos entre ambas.

De igual forma, en concordancia con la sentencia C-1035 del 22 de octubre de 2008²⁴, una vez se da el reconocimiento, ya sea de la pensión de sobrevivientes o de los alimentos sanción, supone que dicho derecho es para su beneficiario un derecho revestido de carácter fundamental e inviolable, que debe ser respetado por el estado y por terceros.

Aunque los alimentos sanción y la pensión de sobrevivientes son dos instituciones jurídicas sumamente diferentes, ambas buscan ofrecer una protección de los derechos fundamentales de las personas, como el derecho al mínimo vital y a la vida digna, y así mismo asegurar su supervivencia en condiciones dignas garantizándole así ciertos derechos y principios constitucionales.

²³ Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-559 de 2017. (M.P. Iván Humberto Escrucería; 31 agosto 2017)

²⁴ Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-1035 de 2008. (M.P Jaime Córdoba Triviño; 22 octubre 2008)

Sería ideal entonces que pudieran confluír ambas, para lograr el reconocimiento de ambas de ellas dentro de la misma prestación económica; la cual sería entonces la pensión del fallecido. En donde a ambos, se les sea reconocido su porción dentro de la pensión, respetando así los derechos de cada uno, sin violentar ni dejar desprotegido ni desamparado a ninguna persona.

Si lo anterior se logra, se podrá entonces dar cumplimiento a la motivación del legislador con las que se establecieron y el fin último de las mismas, de garantizar el mínimo vital y la vida digna de quienes dependían económicamente del fallecido para su supervivencia, y la protección de los derechos de las personas y de la familia.

6. Amparo de derechos y principios constitucionales

Aunque no hay una norma clara y precisa, en la sentencia T-177 del 2 de abril de 2013 la corte confirmó que existe una “regla jurisprudencial que estima que la obligación alimentaria no siempre desaparece con la muerte del alimentante, en tanto permanezcan las condiciones de necesidad que le dieron origen”²⁵ y en sentencia T-095 20 de febrero de 2014 la corte indica que “el pago de la cuota alimentaria se basa en que la jurisprudencia constitucional”²⁶; por lo que es posible afirmar que si existe una línea jurisprudencial que permita afirmar que se debe seguir reconociendo a la ex cónyuge o ex compañero/compañera permanente la acreencia de los alimentos sanción.

Además, porque hay derechos constitucionales que deben ser protegidos y que deben mediar en la convergencia entre los alimentos sanción y la pensión de sobrevivientes; como lo son el derecho a la vida digna y al mínimo vital. Igualmente, la protección de la familia y el respeto de los principios constitucionales que se ven involucrados en dicha problemática.

Y si, por el contrario, se desconocen, resultaría en una situación desamparados, sin un auxilio y sin un sustento para sobrevivir para las personas titulares de dicha obligación alimenticia; de la cual depende para su supervivencia mínima.

²⁵ Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-177 de 2013. (M.P. María Victoria Calle Correa; 2 de abril 2013).

²⁶ Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-095 del 2014. (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; 20 de febrero 2014)

6.1. Cumplimiento de los principios constitucionales

Los principios juegan un papel de suprema importancia cuando, en casos como el que nos ocupa, no existe una norma clara y precisa que establezca como se debe proceder para solucionar un conflicto jurídico; ya que los mismos cumplen una función interpretativa dentro del ordenamiento jurídico. Ello quiere decir que, quien interprete las normas, debe realizar dicha interpretación a la luz de los principios para poder lograrlo adecuada y correctamente.

Según lo afirman grandes pensadores del derecho como Dworkin o Robert Alexy²⁷, los principios también cumplen con una función integrativa, que tiene como fin ayudar a llenar espacio o lagunas cuando la regulación es poca o nula, o cuando hay situaciones no regulados legislativamente, evitando así según Dworkin la discrecionalidad en los casos difíciles. Robert Alexy por su lado, afirma también que donde no hay una norma clara o donde hay vaguedad en el lenguaje y se enfrenta a un caso dudoso, el juez debe apoyarse en los principios para dar una solución y decidir sobre un problema o caso en concreto.

Por ello, cabe precisar, que los principios en el estudio de los casos donde se presenta una divergencia entre los alimentos sanción y la pensión de sobrevivientes, juegan un rol de suprema importancia para esclarecer la problemática y hallar una solución acorde a la motivación y los fines de la regulación de ambas figuras jurídicas, y por ende del derecho colombiano.

²⁷ Juan Pablo Cardona. (2016). Funciones de los principios generales del derecho. 4 de febrero 2019, de Academia Sitio web: https://www.academia.edu/29515479/FUNCIONES_DE_LOS_PRINCIPIOS_GENERALES_DEL_DERECHO

En sentencia C-1035 del 22 de octubre de 2008²⁸ la corte desarrolló dos principios que pueden ser aplicables a las prestaciones asistenciales, los cuales son:

1. Principio de estabilidad económica y social para los allegados del causante:

la sustitución pensional responde a la necesidad de mantener para su beneficiario, al menos el mismo grado de seguridad social y económica con que contaba en vida del pensionado fallecido, que al desconocerse puede significar, en no pocos casos, reducirlo a una evidente desprotección y posiblemente a la miseria²⁹.

2. Principio de reciprocidad y solidaridad entre el causante y sus allegados:

“es el compromiso de apoyo afectivo y de comprensión mutua existente entre la pareja al momento de la muerte de uno de sus integrantes”³⁰, por lo que se busca que “el otro se vea obligado a soportar individualmente las cargas materiales y espirituales”³¹

Asimismo, los principios de solidaridad y de reciprocidad que se deben los cónyuges entre sí, son los que materializan la obligación alimentaria, la cual busca garantizar la subsistencia de uno de sus miembros que no tenga la posibilidad económica de hacerlo por sus propios medios. En

²⁸ Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-1035 de 2008. (M.P Jaime Córdoba Triviño; 22 octubre 2008)

²⁹ Ibidem

³⁰ Ibidem

³¹ Ibidem

numerosas sentencias, como en sentencia T-506 del 30 de junio de 2011, la Corte Constitucional reafirma que, “La obligación alimentaria se ve materializada en virtud del principio de reciprocidad y solidaridad (...) de otorgar lo necesario para garantizar la subsistencia cuando uno de sus miembros no se encuentre en posibilidad de suministrárselos por sus propios medios”³².

La obligación de solidaridad, según esta sentencia de la Corte “se despliega en los deberes de socorro y ayuda mutua que se originan por el vínculo matrimonial, los cuales pueden subsistir inclusive cuando media separación de cuerpos o su disolución”³³. El anterior planteamiento va de la mano, como ya se indicó, con el principio de solidaridad consagrado en la Constitución Política.

Con base en el artículo 42 de la Constitución Política³⁴, y la Sentencia C-1033 del 27 de noviembre de 2002 :

(...) A partir de las anteriores consideraciones se ha concluido que cada persona debe velar por su propia subsistencia y por la de aquellos a quienes la ley le obliga, ello con fundamento en el principio de solidaridad, según el cual los miembros de la familia tienen la obligación de procurar la subsistencia a aquellos

³² Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-506 de 2011. (M.P Humberto Antonio Sierra Porto; 30 de junio 2011).

³³ Ibidem.

³⁴ Constitución Política de Colombia [Const.] (1991) Artículo 42. 2da Ed. Legis.

integrantes de la misma que no están en capacidad de asegurársela por sí mismos³⁵.

Por otro lado, el principio de proporcionalidad de la obligación alimenticia se resume en que es necesario acreditar tanto la necesidad del alimentario como la capacidad económica del alimentante, tal como lo afirma las sentencias C-1033 del 27 de noviembre de 2002³⁶ y la C-237 del 20 de mayo 1997³⁷ para poder que se pueda generar la obligación de los alimentos sanción. Debido a que no se le puede generar una carga que suponga el detrimento de las condiciones de vida suyas.

Los principios de solidaridad, proporcionalidad, reciprocidad y equidad son algunos de los principios que rigen los alimentos sanción y pensión de sobrevivientes, pero que también son aplicables frente la divergencia entre ambas instituciones jurídicas; ya que velan por la protección de la familia y de los miembros de los que se compone la misma. Además de proteger los individuos, su supervivencia y cumplimiento y reconocimiento de sus derechos, que en estos casos tienen carácter fundamental.

Dichos principios, en conclusión, son bases de interpretación, y más aun cuando no existe una norma clara que proporcione una solución precisa a un conflicto, como en la problemática que analiza esta monografía. Además, porque los principios buscan actualizar y hacer justa la

³⁵ Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-1033 de 2002. (M.P Jaime Córdoba Triviño; 27 de noviembre de 2002)

³⁶ Ibidem

³⁷ Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-237 de 1997. (M.P Carlos Gaviria Díaz; 20 mayo de 1997)

interpretación de las normas y del derecho, tal como se requiere en la divergencia que nos ocupa entre dos instituciones jurídicas.

6.2.Derecho a la familia como núcleo de la sociedad y del Estado.

La Constitución Política consagra la obligación alimentaria en sus artículos 42, 44 y 46³⁸, respecto a los menores de edad, personas de tercera edad y cónyuges o compañeros permanentes. Frente a esto la Corte ha señalado que esta obligación se relaciona directamente con la protección a la familia que el Estado debe garantizar como núcleo fundamental de la sociedad, y para la protección de sus derechos fundamentales reconocidos constitucionalmente. Es por esto, que, con fundamento en el principio de solidaridad, los miembros de la familia se deben ayuda entre si y por ende deben procurar por la subsistencia de sus integrantes que no tengan la capacidad suficiente de hacerlo por sus propios medios.

Por otro lado, la jurisprudencia es reiterativa que la obligación alimentaria y su realización surge de la necesidad que tiene el Estado de proteger a la familia como núcleo fundamental de la sociedad y la efectividad de los derechos fundamentales que son reconocidos por la Constitución; como lo indica la corte en Sentencia C-105 del 10 de marzo de 1994, donde se afirma que

³⁸ Constitución Política de Colombia [Const.] (1991) Artículos 42, 44 y 46 2da Ed. Legis.

El Estado y la Sociedad garantizan la protección integral de la familia', independientemente de su constitución por vínculos jurídicos o naturales, lo cual es consecuencia lógica de la igualdad de trato (...) la honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables", sin tener en cuenta el origen de la misma familia³⁹.

Entonces, si las dos instituciones jurídicas en cuestión se establecieron en fundamento y con vocación a la protección a la familia y el estado tiene la obligación de velar por no dejar en estado de desprotección a la familia, ya que según la corte "su finalidad es no dejar en una situación de desprotección o de abandono a los beneficiarios del afiliado o pensionado que fallece"⁴⁰

¿no tendría entonces lógica que el legislador y los jueces hagan una interpretación a favor de la familia y todos los miembros de esta, reconociendo no solo la pensión de sobrevivientes al cónyuge o compañero/compañera supérstite, sino también a la anterior cónyuge o compañero/compañera permanente con la que también el causante conformó una familia y es considerado familia a la luz de la Constitución Política y la jurisprudencia?

Lo anterior, teniendo en cuenta que ya hubo una decisión judicial que determinó que los alimentos sanción eran necesarios en aras de la protección de esta persona con la que conformó familia la persona fallecida.

³⁹ Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-105 de 1994. (M.P. Jorge Arango Mejía; 10 marzo 1994)

⁴⁰ Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-005 de 2018. (M.P. Carlos Bernal Pulido; 13 de febrero de 2018)

De igual forma, en numerosas sentencias como la Sentencia T-095 del 20 de febrero de 2014⁴¹ se reafirma que, la obligación alimentaria a cargo del cónyuge divorciado y culpable (alimentos sanción) se fundamenta en los artículos 160 y 411 del Código Civil⁴², artículos en los cuales se consagra que se deben alimentos al cónyuge inocente cuando el cónyuge alimentante tiene la capacidad económica para suministrarlos y sean necesarios para el alimentario; así como con los diferentes miembros del grupo familiar.

Siguiendo con el planteamiento, es importante aclarar también que la corte en sentencias como la Sentencia C-1035 del 22 de octubre de 2008, confirma que, mediante las instituciones jurídicas en cuestión, se “garantizan derechos constitucionales de carácter fundamental”⁴³ por lo que su reconocimiento y protección es de suma importancia.

Así pues, cabe preguntarse, ¿si antes de que el causante falleciera alcanzaba para el sustento económico de dos familias; por qué luego de su deceso no podría continuar igual?

6.3. Derecho al mínimo vital y a la vida digna.

Los alimentos sanción se establecen a favor del alimentado debido a sus condiciones especiales y a la imposibilidad de satisfacer por sus propios medios las necesidades básicas para su

⁴¹ Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-095 del 2014. (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; 20 de febrero 2014)

⁴² COLOMBIA. Congreso de la República. “Código Civil”. Editorial Legis. 2013. Artículos 160 y 411.

⁴³ Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-1035 de 2008. (M.P Jaime Córdoba Triviño; 22 octubre 2008)

supervivencia según el artículo 411 del Código Civil⁴⁴; ya que de no contar con la ayuda del alimentante no podría asegurarse entonces sus derechos al mínimo vital y a la vida digna.

La obligación de socorrer a la persona que requiere de dichos alimentos surge como consecuencia de la familia que se conformó entre dichas personas; ya que con base en el artículo 42 de la Constitución Política⁴⁵, y la Sentencia C-1033 del 27 de noviembre de 2002:

(...) A partir de las anteriores consideraciones se ha concluido que cada persona debe velar por su propia subsistencia y por la de aquellos a quienes la ley le obliga, ello con fundamento en el principio de solidaridad, según el cual los miembros de la familia tienen la obligación de procurar la subsistencia a aquellos integrantes de la misma que no están en capacidad de asegurársela por sí mismos⁴⁶.

Así pues, el derecho de alimentos que tiene un cónyuge frente al otro, se materializa en la facultad de exigir las asistencias que sean necesarias para su subsistencia y vida digna, siempre y cuando no cuente con las posibilidades de hacerlo por su propia cuenta, según el artículo 411 del Código Civil⁴⁷. Este derecho tiene fundamento legal, pero también lo puede ser por medio de un acto jurídico, acuerdo o testamento. En numerosas sentencias, como la T-440 del 6 de noviembre

⁴⁴ COLOMBIA. Congreso de la República. “Código Civil”. Editorial Legis. 2013. Artículo 411.

⁴⁵ Constitución Política de Colombia [Const.] (1991) Artículo 24. 2da Ed. Legis.

⁴⁶ Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-1033 de 2002. (M.P Jaime Cordoba Triviño; 27 noviembre 2002)

⁴⁷ COLOMBIA. Congreso de la República. “Código Civil”. Editorial Legis. 2013. Artículo 411.

de 2018 la corte es reiterativa en afirmar que busca asegurar “una renta periódica a los miembros del grupo familiar de quien dependían económicamente, como consecuencia de su muerte”⁴⁸.

Es claro que el artículo 411 del Código Civil⁴⁹ consagra en su numeral primero al cónyuge como uno de los titulares del derecho de alimentos, y en el numeral 4 regula el hecho de se le deben alimentos y estarán a cargo del cónyuge culpable, al cónyuge divorciado o separado de cuerpo sin su culpa. Por otro lado, el artículo 160 del Código Civil⁵⁰ consagra que una vez sea disuelto el vínculo del matrimonio civil y cesen sus efectos seguirán estando vigentes los deberes y derechos alimentarios entre cónyuges según sea el caso.

Adicionalmente, la obligación alimentaria se establece debido a que era el alimentante, durante su vida, el que proveía lo necesario para su supervivencia; es decir, la tenía a cargo, por decirlo así, cumplir con las necesidades de supervivencia de dichas personas, ya que dependían económicamente del alimentante y sus recursos, pues de él surgía el sustento para su supervivencia mínima y vida digna.

Así pues, según sentencia C-1035 del 22 de octubre de 2008, la Corte Constitucional indica que “por ello la ley prevé que, en aplicación de un determinado orden de prelación, las personas más cercanas y que más dependían del causante y compartían con él su vida, reciban una pensión para satisfacer sus necesidades”⁵¹. Cabe resaltar dentro de dicho pronunciamiento de la corte,

⁴⁸ Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-440 de 2018. (M.P. José Fernando Reyes Cuartas; 6 noviembre 2018).

⁴⁹ COLOMBIA. Congreso de la República. “Código Civil”. Editorial Legis. 2013. Artículo 411.

⁵⁰ COLOMBIA. Congreso de la República. “Código Civil”. Editorial Legis. 2013. Artículo 160.

⁵¹ Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-1035 de 2008. (M.P Jaime Córdoba Triviño; 22 octubre 2008)

que se debe proteger entonces a quienes más dependían del causante, y quien más tiene probado su dependencia económica del causante que quien la tiene declarada judicialmente.

Teniendo en cuenta el otorgamiento de dichos alimentos sanción, suponen que si el cónyuge o compañero tuvo derecho a cuota de alimentos es debido a que no trabajaba ni era rentista de capital, según la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP), por lo que se justifica la protección a la familia y al mínimo vital al que hace referencia la Corte Constitucional en sentencias T-292 del 2 junio de 2016⁵² y Sentencia T-629 del 15 de noviembre de 2016⁵³.

Como se señaló en Sentencia T-177 del 2 de abril de 2013⁵⁴, dicha obligación no se extingue con la muerte del alimentante si las situaciones de hecho que la originaron no han variado en el tiempo, es decir, si el alimentario sigue requiriendo de la ayuda del alimentante para sobrevivir en condiciones dignas y el alimentante cuenta con los recursos para brindarle esta ayuda. Así pues, La corte indica que la “asistencia alimentaria se establece sobre dos requisitos fundamentales: la necesidad del beneficiario y la capacidad del deudor, quien debe ayudar a la subsistencia de sus parientes, sin que ello implique el sacrificio de su propia existencia”⁵⁵.

Aquí es importante resaltar que, si durante la vida del pensionado o cotizante era posible cumplir con la obligación alimentaria; ya sea porque la pensión que le entrega entregada era suficiente (en el caso del pensionado) o los recursos que devengaba eran y siguen siendo casi los mismos

⁵² Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-292 de 2016. (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; 2 junio 2016)

⁵³ Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-629 de 2016. (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; 15 noviembre 2016).

⁵⁴ Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-177 de 2013. (M.P. María Victoria Calle Correa; 2 de abril 2013).

⁵⁵ Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-237 de 1997. (M.P. Carlos Gaviria Díaz; 20 mayo de 1997)

(en el caso del cotizante); ello quiere decir que si se cumple el requisito de que el alimentante tenga los recursos para seguir cumpliendo con la obligación.

En sentencia C-1033 del 27 de noviembre 2002⁵⁶ la Corte Constitucional es clara al enunciar que la obligación alimentaria tiene una duración por toda la vida del alimentado, siempre y cuando subsistan las condiciones que dieron origen a la misma (necesidad y capacidad), en el caso de divorcio o separación es necesario además que el cónyuge alimentado no inicie una nueva vida marital, pues de lo contrario se extinguirá el derecho. Es por lo anterior que si se da la muerte del alimentado se extinguirá dicha obligación, pues esta no se transmite por causa de muerte. Pero se da una situación diferente cuando quien muere es el alimentante, pues si subsiste el alimentario y su necesidad o las causas que dieron inicio a la obligación, este podrá reclamar los alimentos.

Es importante entonces confirmar la importancia del hecho de que se le reconozca una vez se dé el fallecimiento del causante, los alimentos sanción que le eran pagos y reconocidos al ex cónyuge o excompañero/compañero permanente del fallecido; que ya que de dicho reconocimiento depende la materialización de una vida en condiciones dignas para la persona titular de la pensión alimenticia.

Cabe preguntarse finalmente, ¿no sería lo mas adecuado y acorde a la norma que busca proteger la familia, los derechos fundamentales de las personas y su mínimo vital?

⁵⁶ Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-1033 de 2002. (M.P Jaime Córdoba Triviño; 27 noviembre 2002)

7. Aspectos relevantes a tener en cuenta de los alimentos sanción

7.1. Se deben durante toda la vida del beneficiario del derecho de alimentos

La duración de la obligación alimentaria se encuentra regulada por el artículo 422 del Código Civil, el cual consagra que la misma tendrá una duración por toda la vida del alimentario, no durante toda la vida del alimentante; siempre y cuando subsistan las circunstancias que le dieron origen a la obligación; esto apoyado en diversos pronunciamientos de la Corte Constitucional como la Sentencia T-506 del 30 de junio de 2011⁵⁷ y en la sentencia de Tutela T-1033 del 27 de noviembre de 2002⁵⁸. Los alimentos sanción se deban entonces, hasta que la persona alimentada fallezca, no hasta que el alimentante fallezca; ya que se decretan a favor es del alimentario y debido a sus condiciones, al necesitar los alimentos para su subsistencia.

Es importante aclarar que se da una situación diferente cuando quien muere es el cónyuge alimentante, pues si subsiste el alimentario y su necesidad o las causas que dieron inicio a la obligación, este podrá reclamar a los herederos del deudor el pago de la cuota alimentaria. Esto debido a que el reconocimiento de estos alimentos tiene el propósito fundamental de proteger la dignidad humana y la satisfacción de necesidades básicas, en este caso del cónyuge o compañero permanente inocente, lo anterior teniendo en cuenta la sentencia T-095 del 20 de febrero de 2014⁵⁹.

⁵⁷ Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-506 de 2011. (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; 30 de junio 2011)

⁵⁸ Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-1033 de 2002. (M.P. Jaime Córdoba Triviño; 27 noviembre 2002)

⁵⁹ Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-095 del 2014. (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; 20 febrero 2014)

El argumento anterior tiene sustento en la Sentencia T-1096 del 6 de noviembre de 2008⁶⁰ en la cual la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional ampara el derecho fundamental del accionante que reclamaba el pago de la cuota alimentaria correspondiente al 20% de la pensión de su ex cónyuge fallecido, ya que la entidad encargada de efectuar el pago dejó de hacerlo, con el argumento de que al fallecer el alimentante cesa la existencia de esta obligación y la pensión le corresponde en el 100% a su cónyuge o compañero/a permanente supérstite. Para llegar a esta decisión, la Corte Constitucional se fundamenta en que:

(...) i) de conformidad con el artículo 422 del Código Civil, los alimentos que se deben por ley se entienden concedidos para toda la vida; y (ii) las circunstancias que legitimaron el reconocimiento de alimentos a la actora aún persistían en el tiempo. Al respecto, la Corte sostuvo: “[...] el artículo 422 del Código Civil dispone que los alimentos que se deben por ley se entienden concedidos para toda la vida del alimentario, siempre y cuando permanezcan las circunstancias que legitimaron la demanda. Así pues, la obligación alimentaria puede concluir, entre otras, cuando desaparezcan la necesidad y la falta de recursos económicos del alimentario, o cuando las condiciones económicas del alimentante varíen e impidan continuar suministrando los alimentos. Y si dichas condiciones permanecen llegará hasta la muerte del alimentario, aunque ‘no siempre con la del alimentante’⁶¹.

⁶⁰ Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-1096 del 2008. M.P. Clara Inés Vargas; 6 noviembre 2008).

⁶¹ Ibidem.

Sin embargo, la Corte Constitucional es clara en argumentar que el hecho de seguir reconociendo la cuota alimentaria que fue reconocida con anterioridad por una sentencia judicial durante la vida del alimentario y que se desembolsaba con anterioridad al reconocimiento de la sustitución pensional, no vulnera los derechos fundamentales ni el derecho al debido proceso de la compañera permanente supérstite, pues se esta desarrollando una finalidad constitucional valida, y tampoco se da una afectación al derecho a la seguridad social del beneficiario de la pensión de sobreviviente, pues no se verá afectado el monto que recibía con anterioridad a la muerte del causante, pues la pensión recibida siempre estuvo gravada con los alimentos adeudados.

El argumento anterior fue reiterado en sentencia T-506 del 30 de junio de 2011, en la cual la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional argumenta que:

(...) la muerte del alimentado será siempre causal de extinción del derecho de alimentos, porque el término máximo de duración de dicha obligación es la vida del mismo, pues los alimentos no se transmiten por causa de muerte. || Situación diferente a la anterior, se presenta cuando quien fallece es el alimentante, o lo que es lo mismo, el deudor de los alimentos, pues en este caso no siempre se extingue la obligación, ya que, si subsiste el alimentario y su necesidad, éste último podrá reclamarlos a los herederos del deudor, aunque concretando su pretensión sobre los bienes dejados por el alimentante, siempre y cuando no opere la confusión, como modo de extinguir las obligaciones⁶²

⁶² Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-506 del 2011. (M.P. Humberto Antonio Sierra; 30 de junio 2011).

En la sentencia T-177 del 2 de abril de 2013⁶³, la Corte Constitucional confirma el planteamiento anterior, al considerar que con la muerte del ex cónyuge alimentante no desaparece la obligación alimentaria, pues tanto la Jurisprudencia Constitucional y las normas que regulan este tema, consagran que los alimentos que se deben por ley son concebidos para toda la vida del alimentario, siempre y cuando continúen las circunstancias originaras de la demanda. Manifiesta demás que estos alimentos, tienen una gran protección por el ordenamiento jurídico ya que protegen los derechos fundamentales y cumplen con el debido proceso, por lo que estas decisiones judiciales, de otorgar el derecho de alimentos a un ex cónyuge, debe ser respetada por los fondos de pensiones.

Es por lo anterior que se debe tener claridad de que el cónyuge o compañero supérstite no puede pretender que debe recibir un derecho mejor del que tenía el causante, pues este debe sustituirlo en toda su prestación, gravada o no, ocupando así el mismo lugar que ocupaba el causante con anterioridad a su muerte, incluyendo el monto de la pensión. Con esto, la Sala establece que, como se ha dicho en reiteradas ocasiones, la obligación alimentaria no se extingue con la muerte del ex cónyuge alimentante, siempre y cuando se mantengan sus circunstancias de origen, por lo que las Administradoras de Fondos de Pensiones no tienen la facultad de suspender el pago de una cuota alimentaria reconocida con anterioridad mediante sentencia judicial y con anterioridad al fallecimiento del causante. Y tampoco se podría hablar de una vulneración a los derechos fundamentales a los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes ya que esta obligación fue establecida con anterioridad al reconocimiento de la pensión y fue ordenada mediante sentencia judicial.

⁶³ Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-177 de 2013. (M.P. María Victoria Calle Correa; 2 abril 2013).

7.2. Gravan la masa hereditaria del causante

El capítulo I del Libro V del Código Civil, en lo referente a las asignaciones forzosas dispone en el artículo 1227 lo siguiente: “Los alimentos que el difunto ha debido por ley a ciertas personas, gravan la masa hereditaria, menos cuando el testador haya impuesto esa obligación a uno o más partícipes de la sucesión.”⁶⁴.

El legislador por su parte, en ejercicio de sus facultades se preocupó por las personas que están legitimadas para recibir alimentos en el caso de que su alimentante fallezca, por lo que el artículo 1016 del Código Civil consagra que “(...) se deducirán del acervo o masa de bienes que el difunto ha dejado (...): 4º) Las asignaciones alimenticias forzosas.”⁶⁵

Finalmente cabe resaltar que en sentencia T-095 del 20 de febrero de 2014⁶⁶ la Corte Constitucional es clara al establecer que los cónyuges o compañeros permanentes que son alimentarios tienen derecho a continuar recibiendo el dinero dados por el alimentante en vida en protección a la familia y a los integrantes de la misma, si subsisten las condiciones que le dieron origen, a pesar de que este muera, y por ende, la cuota alimentaria será cancelada con los recursos de la pensión que devenguen sus herederos.

Así pues, es claro que el legislador y la corte, buscan la protección y el reconocimiento de los derechos provenientes de los alimentos sanción aun cuando se produzca la muerte del

⁶⁴ COLOMBIA. Congreso de la República. “Código Civil”. Editorial Legis. 2013. Artículo 1227.

⁶⁵ COLOMBIA. Congreso de la República. “Código Civil”. Editorial Legis. 2013. Artículo 1016.

⁶⁶ Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-095 del 2014. (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; 20 de febrero 2014)

alimentado; ya que evidentemente gravan la masa hereditaria y los bienes o acreencias que tuviera el causante al momento de su muerte.

Lo anterior, constituye un soporte más a afirmar que la obligación alimenticia no termina con la muerte del causante y que se debe seguir reconociendo en aras a proteger los derechos de las personas y su vida en condiciones dignas.

7.3. Constituyen una decisión judicial

El poder judicial, una de las tres ramas principales de poder del estado colombiano; por lo que los jueces son la máxima autoridad a la hora de administrar la justicia y resolver sobre las controversias que se den en materia de derecho.

Los alimentos sanción son una obligación que es decretada y establecida por un juez, mediante sentencia; razón por la cual deben ser respetadas y acatadas en todo momento; y ningún servidor público, entidad o organismo puede irse en contra de las decisiones judiciales; ello incluye claramente a las Administradoras de pensiones.

Según sentencia T-177 del 2 de abril de 2013⁶⁷ las Administradoras de Fondos de Pensiones están obligadas a cumplir las órdenes judiciales respecto al pago de alimentos y de las pensiones de las personas. De igual forma, en sentencia T-095 del 20 de febrero de 2014 la corte indica que:

⁶⁷ Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-177 de 2013. (M.P. María Victoria Calle Correa; 2 de abril 2013).

La obligación de continuar con el pago de la cuota alimentaria se basa en que la jurisprudencia constitucional y la norma prevén que los alimentos que se deben por ley, se entienden concedidos para toda la vida del alimentario, continuando las circunstancias que legitimaron la demanda (...) por lo tanto, tales decisiones deben ser respetadas por los fondos de pensiones, premisa que se refuerza cuando las circunstancias que dieron origen a la decisión persisten en el tiempo⁶⁸.

La Corte Constitucional, además, es clara en afirmar que la obligación de los alimentos sanción sigue vigente, aun luego de la muerte del causante y no se extingue con la muerte del alimentante, y por ende la institución debe continuar con el pago de esta, tal y como estaba establecido por la sentencia judicial que le dio origen.

Por otro lado, el debido proceso busca proteger la tutela de los derechos que fueron reconocidos mediante sentencia judicial, así como lo consagra el artículo 29 de la Constitución Política⁶⁹, y por ende dichos derechos no pueden ser desconocidos por ninguna entidad. Razón por la cual, el derecho de la pensión alimenticia continua vigente a pesar de la muerte de su ex cónyuge ya que el pago de estos fue ordenado mediante sentencia judicial.

⁶⁸ Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-095 del 2014. (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; 20 de febrero 2014)

⁶⁹ Constitución Política de Colombia [Const.] (1991) Artículo 29. 2da Ed. Legis.

Frente al tema del debido proceso, es importante aclarar que la corte indica que el ordenar el pago de los alimentos sanción dentro de la pensión una vez fallecido el causante mediante deducción de esta, no vulnera, en ningún caso, el debido proceso de la cónyuge supérstite ni sus derechos fundamentales.

En la sentencia T-177 del 2 de abril de 2013La Corte Constitucional indica que:

Los derechos reconocidos en decisiones judiciales no pueden revocarse arbitrariamente sin atender a criterios de razonabilidad que justifiquen las decisiones de tales autoridades. Menos aún, cuando los mismos fueron asignados con apego al ordenamiento jurídico y buscaban la satisfacción de bienes constitucionales de mayor entidad, como la protección a las personas en estado de debilidad manifiesta y el principio de solidaridad”⁷⁰ .

Todo lo anterior debido a que los alimentos ordenados por el juez, según la sentencia T 095 del 20 de febrero de 2014 “tienen una protección reforzada por el ordenamiento jurídico, en la medida que desarrollan el derecho al debido proceso y salvaguarda la tutela efectiva de los derechos por parte de la administración de justicia”⁷¹.

⁷⁰ Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-177 de 2013. (M.P. María Victoria Calle Correa; 2 de abril 2013).

⁷¹ Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-095 del 2014. (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; 20 de febrero 2014)

8. Una breve respuesta a las justificaciones usadas por los Regímenes Administradores de Pensiones para negar el derecho de la pensión alimenticia.

Frente a las justificaciones utilizadas las Administradoras de pensiones para negar el pago de la acreencia de los alimentos sanción, es preciso aclarar:

- Justificación 1: Que la cónyuge supérstite del causante no tiene ninguna relación ni ninguna clase de parentesco con la misma, entonces no tiene por qué asumir dicha obligación.

La ex cónyuge o ex compañero/compañera permanente no requiere acreditar la convivencia de los 5 años anteriores a la muerte del causante; ya que dicha persona no está pidiendo que se le sea reconocido una pensión de sobrevivientes; sino que se continúe el pago de un derecho que ya tenía reconocido y frente al cual ya acreditó los requisitos pertinentes para obtener su derecho (requisitos que ya fueron analizados de fondo por el juez que decretó los alimentos sanción).

- Justificación 2: Que no existe dicho derecho ya que la accionante no comprobó que hubiera tenido una convivencia con el causante en los 5 años anteriores a la muerte de este.

La corte indica en la sentencia T-095 del 20 de febrero de 2014 que “al deducir de la pensión de sobrevivientes que le fue reconocida, la cuota alimentaria de la accionante, sino que, por el contrario, se desarrolla una finalidad constitucional válida, como lo es materializar el principio de solidaridad”⁷²

⁷² Ibidem.

Además, la Corte afirma que:

los fondos de pensiones carecen de competencia para retirar el pago de la cuota alimentaria reconocida con anterioridad al fallecimiento del pensionado. De hecho, cancelar los alimentos debidos no implica vulnerar los derechos de los titulares de la pensión de sobrevivencia, puesto que la obligación alimentaria se estableció con anterioridad al reconocimiento de la prestación de la seguridad social, además un juez de la república la ordenó.⁷³

En ese mismo pronunciamiento, la corte precisó que:

el reconocimiento de la cuota alimentaria de la demandante de ese momento no vulneraba el derecho al debido proceso de la compañera permanente del causante, quien fue reconocida como única titular de la sustitución pensional, comoquiera que; i) la obligación alimentaria la estableció una sentencia judicial; y ii) ese dinero se desembolsaba con anterioridad del reconocimiento de la sustitución de sobrevivencia.⁷⁴

De la misma manera, es preciso aclarar que, la pensión de sobrevivientes se genera en virtud de la pensión con la que contaba el causante; por lo que la relación de parentesco no debe ser, como

⁷³ Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-095 de 2014. (M.P Luis Ernesto Vargas Silva; 20 febrero 2014)

⁷⁴ Ibidem

lo indican las Administradoras de pensiones, con la cónyuge o compañero/compañera supérstite, sino por el contrario con el causante.

9. Jurisprudencia relevante

- **Sentencia C-1035 de 2008.**

Linda María Cabrera, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, demandó parcialmente el literal B del artículo 13 de la Ley 797 de 2003⁷⁵, el cual modificó el artículo 47 de la Ley 100 de 1993.

ARTÍCULO 13. Los artículos 47 y 74 quedarán así:

Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:

b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de 30 años de edad, y no haya procreado hijos con este. La pensión temporal se pagará mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En este caso, el beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión, con cargo a dicha pensión. Si tiene hijos con el causante aplicará el literal a).

⁷⁵ Ley 797 de 2003, Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales. Enero 29 de 2003. DO No. 45. 079. Artículo 13.

Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera permanente, con sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de que tratan los literales a) y b) del presente artículo, dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido.

En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante entre un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal, pero hay una separación de hecho, la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente⁷⁶

El fundamento de la demanda de inconstitucional se hace con base en que la ciudadana considera que los apartes normativos que consagran que: “En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante entre un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe convivencia simultánea”⁷⁷, vulneran la Constitución Política.

⁷⁶Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-1035 de 2008. (M.P Jaime Córdoba Triviño; 22 octubre 2008)

⁷⁷ Ibidem

Considera la ciudadana que se vulnera el derecho a la igualdad, ya que se le da una mayor protección al cónyuge o compañero permanente supérstite sin que haya una justificación constitucional o legal. Lo anterior conforme a su argumento de que la Constitución siempre confiere una protección igual a las uniones conyugales y a las uniones de hecho, a pesar de ser diferentes en la forma de su constitución, pero siempre formas legítimas de conformar una familia. Es por lo anterior que la demandante considera que dicho tratamiento desigual a ambas uniones, al considerar la unión de hecho como una relación fortuita y casual, se afecta la protección legal y constitucional de estas uniones.

Por otro lado, considera la accionante que se da una violación al derecho a la familia consagrado en el artículo 42 de la Constitución Política, el cual establece que la familia es constituida por “vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre o una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad libre de conformarla”⁷⁸; es por esto que la actora considera que una norma no puede desconocer la protección a estas uniones y preferir a las uniones conformadas por un vínculo matrimonial.

Considera además que, con la aplicación de la norma demandada, se da una violación al derecho a la seguridad social, ya que esta niega la posibilidad a los compañeros permanentes supérstites de reclamar la pensión de sobrevivientes al considerar que tienen un título menos digno al del cónyuge del causante. Manifiesta la actora que la sustitución pensional es un medio de protección para los beneficiarios del causante, protección que consiste en mantener sus condiciones socioeconómicas en ausencia de su pareja.

⁷⁸ Ibidem.

Por ultimo, la actora considera que se da una violación al derecho a la protección especial de la mujer, ya que la norma demandada disimuladamente genera una discriminación indirecta hacia las mujeres que son compañeras permanentes. Lo anterior conforme a cifras que dan a entender que son las compañeras permanentes quienes ocupan un mayor porcentaje en esta situación que los hombres, pues son las que mas reclaman una pensión de sobrevivientes en comparación con los hombres, por lo que asegura que el Estado tiene la obligación de:

proteger el ingreso de la mujer a un sistema en el cual no tiene suficiente participación, pero si a ello se opone una disposición que discrimina el acceso a la mujer con unión libre a la pensión de sobreviviente el Estado no puede cumplir con su obligación y de allí la importancia de eliminar una norma como la acusada por obstaculizar el acceso de la mujer con vínculo de unión libre, al sistema general de pensiones (...) ⁷⁹.

Para resolver el planteamiento anterior, la Sala Plena de la Corte Constitucional, empieza por analizar el asunto concerniente al matrimonio y a la unión marital de hecho, argumentando que, a pesar de tener una constitución diferente, ambas suponen la cohabitación entre una mujer y un hombre y dan origen a la familia y a un régimen de bienes comunes. Conforme a esto es claro que la Jurisprudencia Constitucional reconoce los derechos a la igualdad de los miembros que conforman una familia en ambas formas de constitución. Es por esto por lo que el legislador no

⁷⁹ Ibidem

tiene la facultad de expedir normas que consagren un trato diferenciador respecto a los derechos y deberes que tienen cónyuge y compañeros permanentes, por lo que las Administradoras no pueden tampoco favorecer de forma diferencial estas relaciones.

Frente a lo anterior la Corte Constitucional a manifestado que:

“El esposo o esposa en el caso del matrimonio y el compañero o compañera permanente, si se trata de unión de hecho, gozan de la misma importancia y de iguales derechos, por lo cual están excluidos los privilegios y las discriminaciones que se originen en el tipo de vínculo contractual. Todas las prerrogativas, ventajas o prestaciones y también las cargas y responsabilidades que el sistema jurídico establezca a favor de las personas unidas en matrimonio son aplicables, en pie de igualdad, a las que conviven sin necesidad de dicho vínculo formal. De lo contrario, al generar distinciones que la preceptiva constitucional no justifica, se desconoce la norma que equipara las dos formas de unión y se quebranta el principio de igualdad ante la ley que prescribe el mismo trato a situaciones idénticas”⁸⁰.

Al analizar el tema de la Pensión de Sobrevivientes, la Corte Constitucional manifiesta que con base en el artículo 48 de la Constitución Política y la Ley 100 de 1993 se da la estructuración del Sistema de Seguridad Social Integral que busca garantizar:

⁸⁰ Ibidem

los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las contingencias que la afecten. Dicho sistema comprende las obligaciones del Estado y la sociedad, las instituciones y los recursos destinados a garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter económico, de salud y servicios complementarios u otras que se incorporen en el futuro”⁸¹.

Conforme a lo anterior, la Pensión de Sobrevivientes busca proteger a los miembros del grupo familiar del pensionado que fallece respecto al posible desamparo al que se puedan enfrentar con ocasión a la misma, por lo que se busca garantizar una vida digna.

Frente a los apartados normativos demandados por la actora, la Corte Constitucional hace un análisis respecto a quienes son los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, tema regulado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003. Conforme a lo anterior, en el caso de que se presente una convivencia simultánea durante los últimos 5 años anteriores a la muerte del causante, la normativa consagra que tendrá derecho a reclamar la pensión de sobrevivientes la esposa o esposo, dejando a un lado a la compañera o compañero permanente.

La Corte Constitucional para analizar si realmente existe una situación de desigualdad conforme a los argumentos de la actora, se basa en los argumentos de la Jurisprudencia Constitucional en los cuales se ha argumentado que si se está en presencia de un trato diferenciador se debe mirar si este se fundamenta en criterios discriminatorios o sospechosos, y si el mismo es necesario o

⁸¹ Ibidem

no, por lo que el Juez deberá analizar mediante un examen de proporcionalidad en sentido estricto si el trato desigual sacrifica o no valores y principios que son constitucionales.

Frente al tratamiento anterior, la Sala acepta que la expresión que fue demandada evidentemente establece un trato diferenciador, fundamentado en una distinción respecto al origen familiar, por lo que excluye a la compañera permanente de poder acceder a una pensión de sobrevivientes, lo anterior fundamentado bajo el entendimiento de que la norma busca garantizar el goce del beneficio a quien tiene efectivamente el derecho. Con esto la Sala considera que:

Frente a esta regulación legislativa, considera la Corte que, de acuerdo con el entendimiento de la dimensión constitucional que irradia la figura de la pensión de sobrevivientes, no existe razón alguna para privilegiar, en casos de convivencia simultánea, la pareja conformada por medio de un vínculo matrimonial, sobre aquella que se formó con base en un vínculo natural. Dicho en otras palabras, no se puede argumentar que, para proteger la familia como núcleo esencial de la sociedad, se excluyan del ámbito de protección asistencial modelos que incluso la propia Carta ha considerado como tales. (...) Al analizar el criterio con base en el cual, en casos de convivencia simultánea, se prefiere al cónyuge a efectos de reconocer la pensión de sobrevivientes, la Corte no encuentra que con la norma se busque alcanzar un fin constitucionalmente imperioso. Es más, la Corte, con base en su propia jurisprudencia, estima que la distinción en razón a la naturaleza del vínculo familiar no puede constituir un criterio con base en el cual, como lo hace

la disposición bajo examen, se establezcan tratamientos preferenciales que desconozcan la finalidad legal y constitucional de la pensión de sobrevivientes.⁸²

En síntesis, para la Corte Constitucional es claro que el trato que se da a ambas uniones con la expresión que fue demandada por la actora no es constitucional, y por ende, considera que se debe declarar una constitucional condicionada de la expresión demandada en el sentido de que también es beneficiario de la pensión de sobrevivientes la compañera permanente y por lo tanto la prestación será dividida, en caso de una convivencia simultanea, en proporción al tiempo de convivencia que hayan tenido con el causante.

- **Sentencia C-075 de 2007**

Marcela Sánchez Buitrago, Luz María Mercado Bernal, Alejandra Azuero Quijano y Daniel Bonilla Maldonado, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, demandaron parcialmente los artículos 1º y 2º de la Ley 54 de 1990 “por la cual se definen las uniones maritales de hecho y el régimen patrimonial entre compañeros permanentes”, modificada parcialmente por la Ley 979 de 2005.

“LEY NÚMERO 54 DE 1990

(diciembre 28)

“Por la cual se definen las uniones maritales de hecho y el régimen patrimonial entre compañeros permanentes”

⁸² Ibidem

El Congreso de Colombia,

DECRETA:

ART. 1º—A partir de la vigencia de la presente ley y para todos los efectos civiles, se denomina unión marital de hecho, la formada entre un hombre y una mujer, que sin estar casados, hacen una comunidad de vida permanente y singular.

Igualmente y para todos los efectos civiles, se denominan compañero y compañera permanente, al hombre y la mujer que forman parte de la unión marital de hecho.

Artículo 2o. Se presume sociedad patrimonial entre compañeros permanentes y hay lugar a declararla judicialmente en cualquiera de los siguientes casos:

- a) Cuando exista unión marital de hecho durante un lapso no inferior a dos años, entre un hombre y una mujer sin impedimento legal para contraer matrimonio;
- b) Cuando exista una unión marital de hecho por un lapso no inferior a dos años e impedimento legal para contraer matrimonio por parte de uno o de ambos compañeros permanentes, siempre y cuando la sociedad o sociedades conyugales anteriores hayan sido disueltas y liquidadas por lo menos un año antes de la fecha en que se inició la unión marital de hecho.

Los compañeros permanentes que se encuentren en alguno de los casos anteriores podrán declarar la existencia de la sociedad patrimonial acudiendo a los siguientes medios:

1. Por mutuo consentimiento declarado mediante escritura pública ante Notario donde dé fe de la existencia de dicha sociedad y acrediten la unión marital de hecho y los demás presupuestos que se prevén en los literales a) y b) del presente artículo.
2. Por manifestación expresa mediante acta suscrita en un centro de conciliación legalmente reconocido demostrando la existencia de los requisitos previstos en los literales a) y b) de este artículo.⁸³

Los actores fundamentan la demanda de inconstitucionalidad de la anterior norma con base en que vulneran el preámbulo y los artículos 1 y 38 de la Constitución Política. Frente a esto, los demandantes exponen su punto de vista respecto a los impactos negativos que se generan en los campos legales para las parejas homosexuales al no estar comprendidos dentro de la regulación de la unión marital de hecho y de las normas que regulan lo relativo a la sociedad patrimonial de compañeros permanentes. Es por lo anterior, que consideran los actores que la norma demandada vulnera el derecho a la dignidad humana y al derecho de asociación.

⁸³ Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C- 075 de 2007. (M.P. Rodrigo Escobar Gil; 7 febrero 2007)

La Sala hace un especial énfasis respecto a la situación de la comunidad homosexual en el ordenamiento jurídico, en la cual manifiesta que a pesar de ser un grupo que ha sido fuertemente discriminado, la Constitución consagra como inconstitucional el trato diferencial respecto a la orientación sexual de las personas, frente a esto ha señalado que:

dentro del ámbito de la autonomía personal, la diversidad sexual está claramente protegida por la Constitución, precisamente porque la Carta, sin duda alguna, aspira a ser un marco jurídico en el cual puedan ‘coexistir las más diversas formas de vida humana⁸⁴.

No obstante, se debe aclarar que a pesar de que existe una prohibición respecto a la discriminación por motivos de orientación sexual, los pronunciamientos de la Corte no se han manifestado respecto al ámbito de parejas del mismo sexo, las cuales carecen de reconocimiento jurídico, por lo que, a pesar de tener un reconocimiento de derechos, son privadas de tener herramientas que las apoyen en su desarrollo como pareja en un ámbito social.

Para la Sala es claro que el Legislador al regular el tema específico de la unión marital de hecho, establece una protección para los integrantes de parejas homosexuales, dejando claramente sin una regulación cierta a las parejas homosexuales, situación que es claramente lesiva para estas parejas y su derecho a la dignidad y al libre desarrollo de la personalidad, por lo que es una clara discriminación. Frente a la dignidad humana, la Corte en reiteradas ocasiones ha señalado que:

⁸⁴Ibidem

(...) la libertad de elección de un plan de vida concreto en el marco de las condiciones sociales en las que el individuo se desarrolle.” De este modo, ha señalado la Corporación, “... la dignidad humana se refleja de manera más inmediata en aquellos derechos que se fundan en las decisiones racionales y autónomas del sujeto...”, y que encuentran expresión en el derecho al libre desarrollo de la personalidad. La Corte ha mostrado cómo, a partir del enunciado normativo contenido en el artículo 16, es posible delimitar “... el objeto de protección de la dignidad entendida como posibilidad de autodeterminarse según el propio destino o la idea particular de perfección, con el fin de darle sentido a la propia existencia.”⁸⁵

Es claro para la Sala que el no reconocimiento de esta situación para las parejas homosexuales es un atentado contra su dignidad, autonomía y derechos fundamentales, al verse impedidos de constituir una familia que produzca efectos jurídicos patrimoniales. Por lo que no existe razón alguna que fundamente esta situación de desprotección, por lo que al haber una ausencia de regulación frente a este tema es claro que se debe aplicar el régimen ordinario civil a las parejas homosexuales, teniendo en cuenta que con esto su autonomía de la voluntad sigue quedando limitada y deja un gran vacío normativo y por ende:

la decisión legislativa de no incluir a las parejas homosexuales en el régimen patrimonial previsto para las uniones maritales de hecho, comporta una restricción

⁸⁵ Ibidem

injustificada de la autonomía de los integrantes de tales parejas y puede tener efectos lesivos, no solo en cuanto obstaculiza la realización de su proyecto de vida común, sino porque no ofrece una respuesta adecuada para las situaciones de conflicto que se pueden presentar cuando por cualquier causa cese la cohabitación.⁸⁶

Para resolver esta demanda, la Corte Constitucional manifiesta que las parejas homosexuales que cumplan con los requisitos de ley respecto a las uniones maritales de hecho por un periodo de 2 años o mas, tendrán acceso al régimen de protección legal dispuesto, y, por lo tanto, quedan amparados por la presunción de existencia de sociedad patrimonial. La Corte declara la exequibilidad de la ley 54 de 1990 en el entendido de que su regulación también se deberá aplicar a las parejas homosexuales.

- **Sentencia T-506-11**

La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional procede a revisar el fallo de la acción de tutela instaurada por Santos María Silva de Pérez contra el Fondo de Pasivos de Puertos de Colombia –FONCOLPUERTOS-. La accionante fundamentó sus peticiones con fundamento en la relación matrimonial, de aproximadamente 17 años, que contrajo con el señor Pedro Pérez Pertuz el 1 de diciembre de 1962. 20 años después de la separación legal, la accionante inicia un proceso de alimentos en contra de su ex cónyuge buscando ayuda respecto a su precaria situación económica, obligación que fue interpuesta al señor Pérez Pertuz el 13 de agosto de 1998 por el

⁸⁶ Ibidem

Juzgado Promiscuo de Familia de Ciénaga Magdalena, por una suma equivalente al 25% de la pensión de jubilación que disfrutaba el señor Pérez.

El 25 de febrero de 1999 se declaro la cesación de los efectos civiles del matrimonio católico celebrado entre ambas partes, el 2 de mayo de 1999 fallece el señor Pérez Pertuz, momento para el cual no se había realizado la liquidación de la sociedad conyugal, por lo que manifiesta la actora que la entidad accionada consigno a su cuenta la cuota alimentico hasta el 27 de septiembre de 1999, ya que desde ese momento la entidad se negó a seguir pagando la prestación en razón a que el señor Pérez ya aparecía como fallecido en la base de datos y por lo tanto, en consideración para la entidad, era una razón suficiente para que cesaran los descuentos que se venían efectuando sobre dicha pensión. La pensión de sobrevivientes fue asignada en su totalidad a su compañera permanente supérstite.

Para resolver esta situación, la Corte Constitucional comienza abordando el tema concerniente al tema de los alimentos que se deben por ley entre cónyuges y los cónyuges divorciados, al respecto considera que, el derecho de alimentos:

(...)implica la facultad que tiene una persona de exigir los emolumentos o asistencias necesarias para su subsistencia, cuando no se encuentre en las condiciones para procurárselos por sí misma, a quien esté legalmente en la obligación de suministrarlos. Generalmente, el derecho de solicitar alimentos

deviene directamente de la ley, aún cuando también puede tener origen en un acto jurídico”⁸⁷

Es por esto que para que una persona pueda reclamar alimentos debe cumplir con ciertos requisitos como lo es carecer de bienes, que la persona que se pretende pague los alimentos tenga los recursos económicos suficientes para proporcionarlos y que exista un vínculo de parentesco o un supuesto de hecho que de origen a esta obligación.

Es importante resaltar que para la Corte Constitucional el derecho de alimentos se fundamenta en el deber de solidaridad que tienen los miembros del grupo familiar entre ellos, ya que tienen el deber de suministrar la subsistencia básica a los integrantes que no tengan la capacidad de hacerlo por sus propios medios. El deber de solidaridad entre cónyuges se da al disponer que existe un deber de auxilio mutuo entre aquellos que decidieron libremente formar una familia, situación regulada específicamente en el numeral 1 del artículo 411 del Código Civil⁸⁸.

Por otro lado, en lo que respecta a la disolución del matrimonio civil por causa de muerte real o presunta de uno de los cónyuges, es necesario aclarar que una vez que se ejecuta la sentencia que decreta el divorcio, se da la cesación del matrimonio civil y de todos sus efectos, pero subsiste el derecho de recibir alimentos de los cónyuges entre sí, es por esto por lo que la legislación civil ha establecido que:

⁸⁷ Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-506 de 2011. (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; 30 de junio 2011)

⁸⁸ COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. “Código Civil”. Editorial Legis. 2013.

el deber de ayuda mutua entre los cónyuges implica que se deban alimento en las siguientes situaciones:

- Cuando los cónyuges hacen vida en común.
- Cuando existe separación de hecho. Los cónyuges separados de hecho o de cuerpos o judicialmente, entre tanto se mantengan sin hacer vida marital con otra persona conservan el derecho a los alimentos.
- En caso de divorcio, cuando el cónyuge separado no es culpable.

Finalmente, es preciso señalar que las disposiciones en materia de alimentos no se limitan a los cónyuges, sino que se hacen extensivas a los compañeros permanentes, por cuanto el origen de esta obligación se encuentra en el deber de solidaridad (...) ⁸⁹

En lo que respecta a la extinción de la obligación alimentaria, el artículo 422 del Código Civil regula el tema al establecer que estos alimentos se entienden concebidos durante toda la vida del alimentario, siempre y cuando continúen las circunstancias que dieron origen a la demanda, esto es, la necesidad del alimentario y la capacidad del alimentante. Situación que da a entender que con la muerte del alimentado se dará la terminación total del derecho de alimentos, ya que los alimentos no se transmiten por causa de muerte, diferente al caso que se da cuando quien fallece

⁸⁹ Ibidem

es el alimentante, pues ya que, si subsiste la necesidad del alimentado, este podrá reclamarlos a los herederos del deudor, situación regulada por el artículo 1016 del Código Civil.

La Sala declara como improcedente la solicitud de la actora al considerar que no existe un perjuicio irremediable para la misma ya que dentro del proceso de sucesión del causante y de liquidación de la sociedad conyugal, le fueron reconocidos diversos bienes.

- **Sentencia T-095/14**

En esta sentencia, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional mediante el proceso de revisión de fallos de tutela, procede a analizar la tutela interpuesta por la señora Alba Mireya Muñoz Castillo en contra de la Caja de Prestaciones de TELECOM – CARPECOM – Departamento de Pensiones, al considerar que sus derechos fundamentales a la vida digna, igualdad, debido proceso, seguridad social y especial protección como persona de la tercera edad, fueron vulnerados por la accionada al no continuar pagándole la cuota alimentaria que tenía a su favor.

La accionante contrajo matrimonio con el señor Pastor Muñoz Ñañez el 14 de mayo de 1995, matrimonio que fue terminado el 28 de junio de 2000 mediante sentencia que decretaba el divorcio y la cesación de los efectos civiles del mismo, además se declaró disuelta y en estado de liquidación la sociedad patrimonial, nunca fue liquidada debido a que nunca hubo un patrimonio que liquidar. En la sentencia se estableció que la accionante recibirá una cuota alimentaria consistente en el 20% de la pensión de vejez de su ex cónyuge y que seguiría como beneficiaria

de la prestación del servicio de salud hasta el momento en que el pensionado iniciará una nueva relación marital.

El ex esposo de la accionante inició una nueva unión marital de hecho con la señora María Margarita Agudelo, relación que termino a comienzos del año 2012. El señor Pastor Muñoz Ñañez fallece el 18 de mayo de 2012, siendo pensionado por vejez de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones –CAPRECOM. Razon por la cual la señora Maria Margaria Agudelo le solicito a la entidad accionada el reconocimiento de la pensión de sobrevivencia del causante, prestacion que fue concedida y le otorgó el 100% de la misma el 24 de octubre de 2012.

Lo anterior generó que el Departamento de Pensiones de la accionada no siguiera cancelando el cuota alimentaria a la ccionante, decision que tomó de manera unilateral y sin notificacion alguna a la señora Muñoz Castillo.

Para resolver el caso en cuestion, la Corte Constitucional comienza por tratar el tema referente a la vigencia de la cuota alimentara cuando fallece el deudor de la obligacion. Frente a esto argumenta la Sala que esta obligacion se extiende durante tutla la vida del alimentario, siempre y cuando subistan las causas que le dieron origen, por lo que la Jurisrpudencia en reiteradas ocasiones ha reconocido que la obligacion alimentaria no se extingue con la muerte del alimentante. Esta obligacion tiene fundamento en el sostenimiento de la familia y la satisfaccion de sus necesidades basicas, por lo que su proposito inicial es proteger la dignidad humana.

La obligación alimentaria entre cónyuges se encuentra reglamentada en los artículos 160 y 411 del Código Civil, los cuales consagran que “el cónyuge culpable debe alimentos al inocente cuando: i) el alimentante posea la capacidad de suministrarlos; y ii) el alimentario los necesite. Ello ocurre en los eventos en que el cónyuge divorciado tiene problemas de salud relevantes y/o no tuviese la capacidad de procurarse el sustento básico para vivir en condiciones dignas.”⁹⁰

Teniendo en cuenta los planteamientos anteriores, la Sala manifiesta que la persona titular del derecho de alimentos tiene derecho a recibirlos a pesar de que su alimentante fallezca, pues si la situación que le dio origen a la obligación continúa, la cuota alimentaria será cancelada con los recursos de la pensión que devengan los herederos del causante.

La Jurisprudencia Constitucional ha sido clara al establecer que el amparo de las personas que solicitan la continuación del pago de la cuota alimentaria que recibían con cargo a la pensión de su ex cónyuge que ya falleció, no afectan en ningún momento el derecho a la seguridad social del beneficiario de la sustitución pensional del causante, ya que este seguirá recibiendo la misma pensión que recibía el causante que estaba restringida por los alimentos adeudados decretados por una providencia judicial. Es por esto por lo que el beneficiario de la pensión de sobreviviente no puede en ningún momento alegar que tiene derecho a recibir un mejor derecho del que disfrutaba a quien está sustituyendo pensionalmente, pues este debe ocupar el mismo lugar del causante.

⁹⁰ Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-095 del 2014. (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; 20 de febrero 2014)

La sala concluye su argumento al establecer que los alimentos efectivamente no se extinguen con la muerte del alimentante, siempre y cuando sigan las circunstancias que le dieron origen, y por otro lado, manifiesta que los fondos de pensiones no tienen competencia para suspender el pago de la cuota alimentaria que fue reconocida con anterioridad al fallecimiento del pensionado. Es por lo anterior que la Sala concede el amparo de los derechos fundamentales a la accionante.

10. Conclusiones

- Si bien es cierto que ambas figuras, son disposiciones jurídicas consagradas en nuestro Ordenamiento Jurídico, existen ciertas ocasiones donde las mismas pueden llegar a divergir y crear controversias entre lo planteado por una y otra disposición. Esto ya que existe un evidente vacío normativo, donde no hay una norma clara y específica que regule estas situaciones especiales y establezca específicamente cómo se deben aplicar estas disposiciones al momento de presentarse una situación de esta, lo que conlleva a escenarios de injusticia, desconocimiento de derechos y aún más importante, de vulneración de principios constitucionales y derechos fundamentales.
- El problema recae en que no existe una disposición normativa, una regulación clara, ni se han realizado pronunciamientos determinantes al respecto, que aclaren que sucede en estos casos, con la pensión de sobreviviente y con la cuota alimentaria que se debe pagar al ex cónyuge o compañera o compañero permanente, y por ende, dicho vacío normativo faculta a los Regímenes Administradores de Pensiones a cesar y negar el pago dicha prestación.

- Resulta de mucha importancia regular la situación de convergencia entre los alimentos sanción y la pensión de sobrevivientes, para que en ningún caso resulte en la violación y/o desconocimiento de los derechos de ninguna de las partes como ha estado sucediendo; ya que de dicho reconocimiento depende la materialización de una vida en condiciones dignas para la persona titular de la pensión alimenticia.
- Una de las principales razones de la problemática radica en que las personas a las que los Regímenes Administradores de Pensiones les niegan el pago de la cuota de los alimentos sanción, no agotan la vía judicial para hacer valer sus derechos, sino que por el contrario se quedan simplemente con la decisión tomada, creyendo que evidentemente, con la muerte del alimentante se da por terminado su derecho, tal y como se lo indican las resoluciones que les niega el pago de los alimentos sanción. Por lo que son pocos los casos que se presentan de personas que agotan también la vía judicial.
- La vocación de la norma, al establecer ambas figuras, tanto la obligación alimentaria como la pensión de sobrevivientes, es la misma; ya que la de velar por la protección de la familia como núcleo de la sociedad y garantizar el amparo de la vida en condiciones dignas cuando la persona de quien dependía su supervivencia fallece, salvaguardando así los derechos fundamentales al mínimo vital y a la vida digna; por lo que no tendría sentido hacer una interpretación de las mismas que contrarié la función con la que se establecieron.

- Los principios tienen como función inicial, la de servir como fuentes de análisis para la interpretación de las disposiciones jurídicas y vacíos normativos. Por lo que en el caso que nos concierne, los principios de proporcionalidad, solidaridad y equidad, en los cuales están fundamentadas estas instituciones jurídicas, deberán entonces tomar partida para mediar e intervenir cuando existen conflictos entre ambas figuras, y quien interprete las normas entonces, debe realizarla a la luz de los mismo para lograr su adecuada aplicación.
- Aun cuando ambas disposiciones regulan dos situaciones normativas diferentes, ambas tienen múltiples puntos de semejanza, razón por la cual la interpretación que debe hacer la jurisprudencia y el legislador de las disposiciones jurídicas en cuestión, dada la motivación, el origen y los fines que las mismas buscan, debe ser incluyente. Ya que el reconocimiento de una no debe suponer el desconocimiento de la otra, debido a que no son excluyentes y tienen la misma vocación, razón por la cual en vez de excluirse, deberían por lo contrario complementarse.
- Los alimentos sanción entre cónyuges se decretan con el fin de cubrir las necesidades más básicas del diario vivir del alimentado, y se fijan debido a las condiciones especiales de dependencia económica del mismo frente al causante. Es por lo anterior que al cesar el pago de los mismos, aun cuando subsisten las causas les dieron origen, dejaría en una situación de total desamparo y desprotección a los cónyuges o compañeros que tienen derecho al pago de alimentos sanción.

- La decisión judicial de establecer una obligación alimentaria no puede ser contrariada ni desconocida por los Regímenes Administradores de Pensiones, ya que son los jueces, al ser el principal ente de administración de justicia del país, son los competentes para resolver este tipo de conflictos, por lo que la decisión de ordenar el pago de los alimentos sanción debe ser respetada y debe continuarse con el pago de esta, tal y como estaba establecido por la sentencia judicial que le dio origen. De hecho, los Regímenes Administradores de Pensiones carecen de competencia para retirar el pago de la cuota alimentaria reconocida con anterioridad al fallecimiento del pensionado.
- Los alimentos sanción se deben durante toda la vida del alimentario, no durante toda la vida del alimentante, pues si subsisten las condiciones y la necesidad del alimentario este tiene derecho a seguir recibiendo los dineros dados por el alimentante en vida, por lo que la justificación de los Regímenes Administradores de Pensiones de cesar el pago de la obligación alimentaria una vez fallece el causante, resulta no solo incorrecto sino que viola decisiones judiciales y los derechos fundamentales del alimentado.
- Si las dos instituciones jurídicas en cuestión, se establecieron en fundamento y con vocación a la protección a la familia y el Estado tiene la obligación de velar por no dejar en situación de desprotección a la familia, legislador y los jueces deberían hacer una interpretación a favor de la familia y todos los miembros de esta, reconociendo no solo la pensión de sobrevivientes al cónyuge o compañero/compañera supérstite, sino también a la anterior cónyuge o compañero/compañera permanente con la que también el causante

conformó una familia y es considerado familia a la luz de la Constitución Política y la jurisprudencia.

- La Corte Constitucional es clara en afirmar que el ordenar el pago de los alimentos sanción dentro de la pensión de vejez mediante deducción de la misma, no vulnera, en ningún caso, el debido proceso de la cónyuge superviviente ni sus derechos fundamentales, puesto que la obligación alimentaria se estableció con anterioridad al reconocimiento de la prestación de la seguridad social.
- Es posible que se le reconozca la pensión de sobrevivientes al cónyuge superviviente o compañero permanente del fallecido, pero a la vez que se siga cumpliendo con la obligación de alimentos sanción que estaba a cargo del mismo, ya que se puede mediante descuento de la pensión cumplir con ambas obligaciones. Si antes de la muerte del causante alcanzaba para cumplir con ambas obligaciones, debería entonces, en tanto permanezcan las condiciones que le dieron origen, luego del deceso del causante también ser suficiente.
- Aunque no hay una norma clara y precisa frente a la divergencia entre ambas figuras, todos los pronunciamientos que ha hecho la Corte Constitucional apuntan a favor del reconocimiento a la persona titular de la pensión alimenticia, lo que le corresponde como alimentos dentro de dicha pensión, aún después del deceso del causante; en aras a la protección de los derechos, la vida digna y la supervivencia de las personas y de la familia.

- Lo ideal sería que pudieran confluír ambas figuras institucionales normativas, para lograr el reconocimiento de ambas de ellas dentro de la misma prestación económica, la cual sería entonces la pensión del fallecido. En donde a ambos, se les sea reconocido su porción dentro de la pensión, respetando así los derechos de cada uno, sin violentar ni dejar desprotegido ni desamparado a ninguna persona. Y se podrá entonces dar cumplimiento a la motivación del legislador con las que se establecieron y el fin último de las mismas.

11. Bibliografía

- COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 100 (23, diciembre 1993). Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial No. 41.148 del 23 de diciembre de 1993.
- COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Constitución Política de Colombia 1991.El Congreso, 1991.
- COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. “Código Civil”. Editorial Legis. 2013.
- COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 797 (29, enero 2003). Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales. Diario Oficial No. 45.079 de 29 de enero de 2003.
- Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C- 075 de 2007. (M.P. Rodrigo Escobar Gil; 7 febrero 2007)
- Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-105 de 1994. (M.P. Jorge Arango Mejía; 10 marzo 1994)

- Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-1022 de 2002. (M.P. Jaime Córdoba Triviño; 27 de noviembre del 2002)
- Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-1033 de 2002. (M.P. Jaime Córdoba Triviño; 27 de noviembre de 2002)
- Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-1035 de 2008. (M.P. Jaime Córdoba Triviño; 22 octubre 2008)
- Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-237 de 1997. (M.P. Carlos Gaviria Díaz; 20 mayo de 1997)
- Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-245 del 2017. (M.P. José Antonio Cepeda Amarís; 25 de abril de 2017)
- Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-727 de 2015. (M.P. Myriam Ávila Roldán; 25 de noviembre de 2015)
- Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-005 de 2018. SU005/18. (M.P. Carlos Bernal Pulido; 13 de febrero de 2018)
- Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-095 del 2014. (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; 20 de febrero 2014)

- Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-177 de 2013. (M.P. María Victoria Calle Correa; 2 de abril 2013).
- Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-266 de 2017. (M.P. Alberto Rojas Ríos; 28 abril 2017)
- Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-292 de 2016. (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; 2 junio 2016.)
- Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-326 de 2013. (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; 5 de junio de 2013)
- Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-440 de 2018. (M.P. José Fernando Reyes Cuartas; 6 noviembre 2018).
- Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-506 de 2011. (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; 30 de junio 2011)
- Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-559 de 2017. (M.P. Iván Humberto Escrucería; 31 agosto 2017)
- Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-629 de 2016. (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; 15 noviembre 2016).

- Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, Sentencia del 13 de julio de 2017, STC9523-2016. M.P Ariel Salazar Ramírez.
- Juan Pablo Cardona. (2016). Funciones de los principios generales del derecho. 4 de febrero 2019, de Academia Sitio web:
https://www.academia.edu/29515479/FUNCIONES_DE_LOS_PRINCIPIOS_GENERALES_DEL_DERECHO
- Relatoría Sala de Casación Laboral. (2018). RECONOCIMIENTO DE PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES A CÓNYUGE SUPÉRSTITE SEPARADO DE HECHO, SIN QUE PARA ELLO SE REQUIERA SOCIEDAD CÓNYUGAL VIGENTE, SIEMPRE QUE ACREDITE CONVIVENCIA CON EL CAUSANTE POR UN LAPSO NO INFERIOR A CINCO AÑOS EN CUALQUIER ÉPOCA.. 10 de febrero de 2019, de Corte Suprema de Justicia Sitio web:
<http://www.cortesuprema.gov.co/corte/index.php/2018/10/05/reconocimiento-de-pension-de-sobrevivientes-a-conyuge-superstite-separado-de-hecho-sin-que-para-ello-se-requiera-sociedad-conyugal-vigente-siempre-que-acredite-convivencia-con-el-causante-por-un-lap-2/>